

FISCALÍA EN TERRITORIO

PICHINCHA

SE INICIÓ UN PROCESO PENAL CONTRA CIUDADANOS POR DELINCUENCIA ORGANIZADA EN QUITO

Cinco personas con prisión preventiva dentro del proceso seguido por delincuencia organizada para cometer robo a mano armada, es el resultado del operativo "Esparta" liderado por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti 1) de la Fiscalía Provincial de Pichincha.

En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía como titular de la acción pública penal, presentó elementos de convicción ante la jueza de flagrancia Gloria Mayorga, como informes de seguimientos, escuchas telefónicas y los indicios levantados en el operativo "Esparta", ejecutado la tarde y noche del 27 de febrero de 2018.

De esta manera se abrió una instrucción fiscal por 90 días.

Entre enero de 2017 y enero de 2018, estos ciudadanos habrían integrado una organización para cometer asaltos a mano armada a personas, inmuebles, locales comerciales, entidades financieras (sacapintas), robo en carreteras y delitos concernientes a sustancias sujetas a fiscalización y receptación (ocultar cosas robadas). 43 denuncias estarían relacionadas con esta organización.

Durante el operativo, la Fedoti 1 y los agentes de la Subdirección de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad (Sidpro-BAC), allanaron viviendas en los sectores de Solanda, Guamaní y

la Ciudadela Ibarra, ubicados en el sur de Quito. También dos locales situados en el Centro Comercial Montúfar, en el centro de la capital. Se incautaron celulares y mercadería sin papeles de origen, armas de fuego y droga.

La delincuencia organizada está tipificada en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) e impone una pena privativa de libertad de siete a 10 años a la persona que forme el grupo y a quienes colaboren, una sanción de cinco a siete años.

43 Denuncias estarían relacionadas con esta organización delictiva.



AZUAY

FISCALÍA OBTUVO SENTENCIA DE 34 AÑOS Y 8 MESES PARA AUTOR DE ASESINATO DE NIÑO

La agresión física que ocasionó la muerte de un niño de un año y cuatro meses de edad, alcanzó justicia con una sentencia de 34 años y 8 meses, en contra de Henry C., responsable del hecho ocurrido en la parroquia Baños, sur de Cuenca.

El fiscal del caso, Paúl Serrano, sustentó la acusación durante la audiencia de juicio desarrollada el 26 y 27 de febrero, ante los jueces del Tribunal de Garantías Penales del Azuay. Como reparación integral, se ordenó que el sentenciado cancele USD 50.000 a la madre del menor.

En esta audiencia, la Fiscalía presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial para comprobar la responsabilidad del sentenciado en el delito. Entre los elementos probatorios constan: testimonios de la madre y familiares de la víctima, agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de Personas, (Dinased), que investigaron el hecho, del médico legal de la Fiscalía que practicó la autopsia y concluyó que la causa de la muerte fue un traumatismo craneo encefálico grave.

Según la investigación, el sentenciado agredió al niño, la tarde del sábado 15 de julio de 2017, dentro de un inmueble situado en una hacienda. En este lugar, residían la madre del niño y el procesado, pues eran trabajadores de la hacienda y se dedicaban a actividades ganaderas.

La Fiscalía procesó a Henry C. según el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el asesinato con privación de libertad de 22 a 26 años. Además se consideraron circunstancias agravantes.



MANABÍ

JUEZA ACOGIÓ PEDIDO DE FISCALÍA Y DECLARÓ LA NULIDAD DE LO ACTUADO EN CASO DE NARCOTRÁFICO

Tras analizar los argumentos presentados por la Fiscalía, la Jueza de Garantías Penales del cantón Sucre, declaró la nulidad de lo actuado por la fiscal Angélica B., procesada por asociación ilícita, en el caso de la incautación de 582 kilos de clorhidrato de cocaína en una avioneta, dentro del aeropuerto "Los Perales" del cantón San Vicente, en diciembre de 2017.

En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, tras 60 días de investigación, el fiscal Especializado en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (FEDOTI) de Manabí, Rubén Balda, solicitó a la jueza declarar la nulidad de lo actuado por la funcionaria, pues habría intervenido a favor del grupo delictivo conformado por ecuatorianos y extranjeros, quienes pretendían trasladar la droga a Centro América.

Para ello la fiscal reformuló cargos contra 9 personas, de Tráfico Ilícito de sustancias sujetas a fiscalización (cuya pena es de 10 a 13 años) a Producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (con una sanción de 7 a 10 años).



Angélica B. fue detenida el pasado 31 de enero en un operativo dirigido por la Fiscalía del Guayas y actualmente está detenida. En este caso también son procesados funcionarios de la Dirección de Aviación Civil.